



**GUADALAJARA, JALISCO, A 21 VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.**

**V I S T O S** para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por [REDACTED], en contra del DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO.

### **R E S U L T A N D O**

**1.** Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el tres de diciembre del año dos mil veinte,

[REDACTED], interpuso demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de la autoridad citada en el párrafo que antecede, teniendo como actos controvertidos: **I. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 316905269; **II. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 320827647 y 321511619; **III. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 322682603; **IV. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 319797700; **V. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 318338230 y 316164552; **VI. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 315704235 y 318461457; **VII. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 318431523; **VIII. Respecto del vehículo con placas de circulación JMV7732 del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 315973198; **IX. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 315640695; y **X. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 323002681. Dicha demanda se admitió por auto de fecha nueve de diciembre de la anualidad próxima pasada.

**2.** En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza; así mismo, se ordenó emplazar a la autoridad enjuiciada corriéndole traslado con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjera contestación, apercibida de las consecuencias legales de no hacerlo.

**3.** Por auto del día quince de abril del año dos mil veintiuno, se tuvo al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado dando contestación en tiempo y forma a la demanda, se admitieron las pruebas ofrecidas, mismas que se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza.



4. Por último, con fecha dieciséis de abril de la presente anualidad, al no existir prueba pendiente por desahogar, por lo que se concedió a las partes el plazo legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, razón por la cual se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

### **CONSIDERANDO**

**I.** Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad.

**II.** Previo a entrar al estudio de la presente controversia, se destaca que si bien en el auto admisorio de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, se estableció como actos impugnados las cédulas de infracción con números de folio; 316905269, 320827647, 321511619, 322682603, 319797700, 318338230, 316164552, 315704235, 318461457, 318431523, 315973198, 315640695 y 323002681, con relación al automotor con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco; también lo es que del análisis integral de la demanda se desprende que dichos folios fueron expedidos respecto de diversos automotores, como se aprecia de la redacción efectuada a fojas 2 a 4 de dicho recurso, que es del tenor siguiente:

**"1° Respecto del vehículo con placas**

[REDACTED]  
[REDACTED]:

*a) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 316905269, de fecha 02 de mayo de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**2° Respecto del vehículo con placas**

[REDACTED]  
[REDACTED]:

*b) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 320827647, de fecha 03 de julio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

*c) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 321511619, de fecha 02 de julio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**3° Respecto del vehículo con placas**

[REDACTED]  
[REDACTED]:



*d) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 322682603, de fecha 21 de julio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**4° Respecto del vehículo con placas** [REDACTED]

*e) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 319797700, de fecha 01 de junio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**5° Respecto del vehículo con placas** [REDACTED]

*f) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 318338230, de fecha 03 de junio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

*g) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 316164552, de fecha 27 de abril de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**6° Respecto del vehículo con placas** [REDACTED]

*h) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 315704235, de fecha 18 de abril de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

*i) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 318461457, de fecha 03 de junio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**7° Respecto del vehículo con placas** [REDACTED]

*j) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 318431523, de fecha 03 de junio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**8° Respecto del vehículo con placas** [REDACTED]



[REDACTED]:

*k) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 315973198, de fecha 27 de abril de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

[REDACTED]:

*l) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 315640695, de fecha 16 de abril de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

**10° Respecto del vehículo con placas**

[REDACTED]:

*m) La cédula de notificación de infracción (foto infracción) con número de folio 323002681, de fecha 28 de julio de 2020, emitida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.*

Por ende, se debe considerar que la litis es con relación a los automotores aducidos, no así por el señalado en el proveído citado con antelación, siendo aplicable al caso que nos ocupa lo dispuesto en la jurisprudencia número 1a./J.104/2004<sup>1</sup>, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 71/2004-PS, que es del tenor siguiente:

**“LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).** Si en el auto admisorio de la demanda no se mencionan todas las acciones hechas valer por la parte actora en el escrito relativo, el hecho de no impugnarlo no implica el consentimiento de que sólo las acciones comprendidas en ese auto serán materia de la litis, pues estimar lo contrario significaría que el Juez es quien plantea la controversia, lo cual es inadmisibles, porque la determinación de los puntos litigiosos en un proceso no corresponde al juzgador, sino a las partes. En efecto, de acuerdo con los artículos 28 y 87, así como los diversos 478 y 479 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, respectivamente, el litigio u objeto del proceso se fija a partir de las pretensiones expresadas en los escritos de demanda y contestación y, en su caso, de reconvención y contestación a ésta, así como en el de desahogo de la vista que se dé con las excepciones y defensas opuestas, correspondiendo al Juez tomar en

<sup>1</sup> Visible en la página 186 del tomo XXI, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil cinco.



cuenta todo lo que plantean las partes para poder resolver el litigio, independientemente de que se comprenda o no en el auto que admite la demanda, para que, de esta manera, se cumpla con los principios de completitud de las sentencias, establecido por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de congruencia de las mismas, conforme a los cuales, se debe resolver sobre todo lo efectivamente planteado por las partes.”

**III.** La existencia de las cédulas de notificación de infracción impugnadas se encuentra debidamente acreditadas con su original que obran agregadas a foja 29 a 41 del sumario en que se actúa, la cual adquiere valor probatorio pleno al tenor de los numerales 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, por tratarse de un instrumento público.

**IV.** El interés jurídico del accionante, quedó colmado con el original de las cédulas de notificación de infracción impugnadas, mismas que de su contenido se desprende que es a quien se le atribuyó la conducta infractora como propietario de los vehículos, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

A lo anterior, cobra aplicación por las razones que sustenta la tesis III.2o.A.35 A (10a.)<sup>2</sup>, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice:

**“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PARA RECLAMAR LAS INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, DETECTADAS A TRAVÉS DE EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLÓGICOS. SE ACREDITA CON LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA DENOMINADA "FOTO INFRACCIÓN", DIRIGIDA AL QUEJOSO.** En términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, abrogada, constituye una condición para la procedencia del juicio de amparo, la existencia de un agravio personal y directo en la esfera de derechos del impetrante; en ese tenor, el interés jurídico para reclamar las infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se acredita con la cédula de notificación de la denominada "foto infracción" dirigida al quejoso, puesto que revela que es el sujeto a quien la norma aplicable le obliga -sea o no el conductor del vehículo- al pago de la multa relacionada con el vehículo a que el documento se refiere, sin que sea jurídicamente dable exigir mayores elementos de prueba.”

**V.** Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían

---

<sup>2</sup> Página 1890, Libro XX, mayo de dos mil trece, tomo 3, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 2003609 en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de la sanción combatida por la demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número I.4o.A. J/44<sup>3</sup>, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:

**“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR.** En el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, **iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana**, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos.”

**VI.** En ese sentido, se estudia el primer concepto de impugnación que plantea el accionante en su escrito de demanda, consistente en que el funcionario que emitió las cédulas de infracción combatidas no fundó de manera suficiente su competencia, pues omitió expresar los preceptos legales y reglamentos que doten de competencia tanto material como territorial, que le otorguen la facultad, ya que corresponde al municipio actuar en materia de vialidad y tránsito de conformidad al artículo 115 Constitucional, fracción III, inciso h), por lo que contraviene lo establecido por el numeral 16 de la Carta Magna.

El Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, adujo en su contestación que la competencia para emitir las cédulas de mérito se encuentra establecida en el propio acto impugnado, por lo que cumple con los elementos y requisitos de validez que todo acto de autoridad debe contener.

Es fundado lo expuesto por el promovente, pues en efecto el numeral 115 Constitucional, reserva como una función de los municipios, a saber:

**“Artículo 115.-** Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

<sup>3</sup> Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil seis, registro número 174974.





(...)

**III.-** Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

(...)

**h).-** Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y **tránsito**;

(...)

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.”

Así mismo, la fracción II, inciso D, del arábigo 115 de la Constitución Federal, establece el procedimiento y condiciones para que un gobierno Estatal asuma una función o preste un servicio municipal:

**“II.-** Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

(...) **d)** El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y”

De lo transcrito se advierte que corresponde a los municipios los servicios seguridad pública, policía preventiva y tránsito, los cuales pueden ser ejercidos previo convenio de colaboración, es decir, para que un Gobierno Estatal esté en condiciones de asumir una función o prestar una función municipal, sólo lo podrá realizar cuando exista un acuerdo entre ambos niveles de gobierno, o cuando se esté en el supuesto de que el municipio se incapaz de prestarlos o ejercerlos, para lo que deberá mediar previa solicitud del Ayuntamiento hacia la legislatura estatal, y que esta considere que en efecto el municipio se encuentra imposibilitado para prestar o ejercer la función que se pretenda delegar.

En ese sentido, del análisis de los documentos combatidos, no se desprende que el funcionario público emisor haya citado el convenio de colaboración y/o coordinación celebrado con el Ayuntamiento respectivo (competencia material especial) y el señalamiento del lugar en el que se suscitaron, respecto del cual, precisara que corresponde a jurisdicción municipal, y que se contaba con convenio para prestar el servicio municipal de tránsito (competencia territorial especial), y al no hacerlo así, resulta insuficiente la fundamentación de la competencia de la enjuiciada para emitirlo.



A lo anterior cobra aplicación por las razones que sustenta, la tesis III.5o.A.19 A (10a.)<sup>4</sup>, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

**“SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE JALISCO EN LOS ACTOS RELATIVOS.** Conforme al artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tienen la facultad primigenia y exclusiva para prestar, directamente, entre otros, el servicio público de tránsito (salvo convenio aprobado por el Ayuntamiento respectivo). Por otra parte, del artículo 15 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 2/98, el 20 de octubre de 1998, se colige que los Municipios deben ejercer el control del tránsito en las zonas urbanas o centros de población de su territorio, en tanto que al Estado corresponde efectuarlo en carreteras y puentes estatales. Por tanto, los actos de las autoridades del Estado de Jalisco en el ejercicio del servicio público de tránsito, a fin de fundar su competencia, en términos del numeral 16 constitucional, forzosamente deberán contener: a) cuando el hecho que dio motivo a su emisión ocurra en caminos y puentes de jurisdicción estatal, la cita de los preceptos legales que confieren las atribuciones respectivas (competencia material) y el señalamiento del lugar en el que se suscitaron, respecto del cual deberá precisarse que corresponde a esa jurisdicción estatal (competencia territorial) y, b) en los casos en que la infracción se detecta en una zona urbana municipal, cuya facultad originaria para prestar el servicio público de tránsito recae en el Municipio, indicarán los preceptos legales que les confieren atribuciones en materia de tránsito (competencia material), el convenio de colaboración y/o coordinación celebrado con el Ayuntamiento respectivo (competencia material especial) y el señalamiento del lugar en el que se suscitaron, respecto del cual deberá precisarse que corresponde a jurisdicción municipal, de la cual se cuenta con convenio (competencia territorial especial).”

Sirve también de apoyo por analogía al presente caso la jurisprudencia P./J. 56/2000<sup>5</sup> aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha veintiocho de marzo del año dos mil, que dice:

**“TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN.** El artículo 115 de la Constitución reserva a los Municipios, entre diversas

<sup>4</sup> Publicada el viernes tres de junio del año dos mil dieciséis, Semanario Judicial de la Federación, décima época, consultable con el número de registro 2011823 del “IUS” de la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

<sup>5</sup> Visible en la página 822, tomo XI, abril del año dos mil, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 191989 en el “IUS” de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





atribuciones, la de prestar el servicio público de tránsito. Por lo tanto, si un Municipio celebra un convenio con el Gobierno del Estado para que éste lo preste en el lugar en el que reside, el mismo no puede prevalecer indefinidamente frente a la disposición constitucional, por lo que el Municipio, en cualquier momento, puede reivindicar las facultades que se le reconocen en la Constitución y solicitar al Gobierno del Estado que le reintegre las funciones necesarias para la prestación de ese servicio, lo que deberá hacerse conforme a un programa de transferencia dentro de un plazo determinado y cuidándose, por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia, el servicio público seguirá prestándose en los términos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo el proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la población, así como que el plazo en el que se ejecute el programa deberá atender a la complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe caracterizar la actuación de los órganos de gobierno.”

Así mismo, la jurisprudencia P./J. 47/2011 (9a.)<sup>6</sup> aprobada por el Pleno del máximo tribunal del país con fecha ocho de septiembre del año dos mil once, que por rubro y texto establece:

**“SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN.** Las normas que las Legislaturas Estatales pueden emitir en materia de tránsito, como derivación de las facultades concedidas a los Estados por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben limitarse a dar un marco normativo homogéneo que otorgue cierta uniformidad a la prestación del servicio en toda la entidad. La competencia normativa estatal se extiende, entre otros, a los siguientes rubros: registro y control de vehículos; reglas de autorización de su circulación; emisión de placas, calcomanías y hologramas de identificación vehicular; reglas de expedición de licencias de manejo y otros requerimientos necesarios para que puedan circular, reglas a las que deben sujetarse los pasajeros y peatones respecto a su circulación, estacionamiento y seguridad; fijación de conductas que constituyan infracciones y sanciones aplicables; facultades de las autoridades de tránsito, y los medios de impugnación de los actos de las autoridades competentes en la materia. El esquema normativo estatal debe habilitar un espacio real para el dictado de normas municipales que regulen los servicios públicos que la Constitución deja a cargo de los Municipios conforme a las especificidades de su contexto. **Entonces, las facultades municipales de creación normativa se desplegarán, al menos, respecto de la administración, organización, planeación y operación del servicio de tránsito dentro de su jurisdicción, en garantía de su prestación continua, uniforme, permanente y regular.** Estos rubros permiten a los Municipios regular cuestiones como el sentido de circulación de las calles y avenidas, el horario para la prestación de los servicios administrativos, el reparto competencial entre las diversas autoridades municipales en materia de tránsito, las reglas de seguridad vial

<sup>6</sup> Visible en la página 306, Libro 1, octubre del año dos mil once, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 160747 en el “IUS” de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 3480/2020**

en el Municipio y los medios de impugnación contra los actos de las autoridades municipales, de manera no limitativa. De ahí que serán, por tanto, inconstitucionales todas las normas estatales que no contengan este tipo de regulación general y no concedan a los Municipios espacio suficiente para adoptar normas de concreción y ejecución que deben permitirles ejercer su potestad constitucional a ser distintos en lo que les es propio, y a expresarlo desplegando la facultad normativa exclusiva que les confiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional.”

Por lo anterior, al no citar el funcionario público emisor los convenios entre los niveles de gobierno municipal y estatal, así como no fundar los actos impugnados en el instrumento que le otorgaba tal facultad, es inconcuso que la sanción controvertida carece de la fundamentación al respecto, contraviniendo así lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 13 fracción III de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, actualizándose en consecuencia, la causa de anulación prevista en el artículo 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa, por lo que resulta procedente declarar **la nulidad lisa y llana de las cédulas de notificación de infracción impugnadas.**

**VII.** No se entra al estudio de los demás conceptos de anulación que plantea el accionante en su escrito de demanda, porque en caso de resultar fundados los mismos, en nada variaría el sentido de este fallo.

Apoya al argumento anterior la jurisprudencia número I.2o.A. J/23<sup>7</sup>, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice:

**“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR.** La exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.”

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74 fracción II, 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

**RESOLUTIVOS**

**PRIMERO.** Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa

<sup>7</sup> Publicado en la página 647 del tomo X de la novena época del Semanario Judicial y su Gaceta, de agosto de mil novecientos noventa y nueve, registro número 193430.



del Estado de Jalisco es competente para tramitar y resolver este juicio.

**SEGUNDO.** La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y la enjuiciada no opuso excepciones, por lo tanto;

**TERCERO.** Se declara la nulidad lisa y llana de los actos consistentes en: **I. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 316905269; **II. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 320827647 y 321511619; **III. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 322682603; **IV. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 319797700; **V. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 318338230 y 316164552; **VI. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 315704235 y 318461457; **VII. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 318431523; **VIII. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 315973198; **IX. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 315640695; y **X. Respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco:** la cédula de notificación de infracción con número de folio 323002681.

**CUARTO.** Se ordena a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, efectúe la cancelación de las sanciones descritas en el resolutivo que antecede, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones conducentes en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**NOTIFÍQUESE MEDIANTE BOLETÍN A LA PARTE ACTORA Y POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.**

Así lo resolvió el Magistrado **HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ**, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la Secretario, Licenciada **Anna Stephanie Vera López**, quien autoriza y da fe. -----

HLH/ASVL/jrhm

*"La Sala o Ponencia que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del*



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

**PRIMERA SALA UNITARIA**  
**EXPEDIENTE: 3480/2020**

*Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por acztualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”*